

La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, la cesión de datos del Padrón municipal de habitantes de la población consultante al Consulado General de España en Montpellier (Francia), correspondientes al nombre, apellidos y domicilio o residencia de los hijos de una persona fallecida en dicho país, con la finalidad de que dichos afectados puedan conocer lo concerniente a la condición de beneficiaria de una prestación de la seguridad social francesa de su madre fallecida.

I

Las comunicaciones de datos de carácter personal objeto de la consulta implican un supuesto de cesión de datos de carácter personal entre organismos públicos, regulado en el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Dicho precepto se ha visto afectado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, indicando la redacción resultante de la anulación parcial del mismo que *“los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos”*.

Por este motivo, no es dable a los departamentos u órganos administrativos responsables de los ficheros determinar libremente las cesiones

que de dichos ficheros se efectúen a otras Administraciones Públicas, de tal forma que dicha cesión sólo será admisible cuando cedente y cesionario desempeñen unas mismas competencias o exista una norma con rango de Ley habilitante para la cesión.

En lo que respecta al acceso a los datos del Padrón Municipal, esta Agencia, ha seguido el criterio que a continuación se expone:

El Padrón municipal de habitantes es un registro de carácter administrativo que se encuentra regulado por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, cuyo artículo 16 establece en su apartado primero que *“El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos”*.

Respecto a la cesión de los datos en él contenidos, el mismo artículo en su apartado tercero recoge los principios que rigen la transmisión y utilización de los datos del Padrón Municipal, al disponer que *“ Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia en la materia.”*

En relación con este precepto, la Agencia de Protección de Datos ha considerado que la expresión «datos del Padrón municipal» que se emplea en este artículo 16.3 de la LBRL se refiere únicamente a los datos que en sentido propio sirven para atender a la finalidad a que se destina el Padrón

municipal: la determinación del domicilio o residencia habitual de los ciudadanos, la atribución de la condición de vecino, la determinación de la población del municipio y la acreditación de la residencia y domicilio. Por ello, cualquier cesión de los datos del Padrón deberá fundarse en la necesidad por la Administración cesionaria, en el ejercicio de sus competencias, de conocer el dato del domicilio de la persona afectada, dado que del artículo 4.2 de la LOPD se deriva la imposibilidad del tratamiento de los datos para fines diferentes de los que motivaron su recogida, salvo que así lo consienta el afectado o la Ley lo prescriba.

Fuera de los supuestos contemplados en dicho artículo 16. 3 de la LBRL, debe tenerse en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, que con carácter general, dispone en el artículo 11.1: “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

El apartado segundo del mismo artículo establece una serie de supuestos donde se exceptiona la regla anterior, estableciendo casos en que la cesión de datos personales puede llevarse a cabo sin el consentimiento de los afectados, destacando entre tales supuestos el que una norma con rango legal habilite la cesión.

No obstante, al tratarse de datos contenidos en el Padrón Municipal de Habitantes y por tanto, de un fichero de titularidad pública responsabilidad del Ayuntamiento, debe partirse, con carácter general, del principio de finalidad del Padrón previsto en la propia normativa de régimen local que, tal y como dispone el artículo 16.1 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, es la de servir de registro administrativo donde consten los datos referidos a los

vecinos del Municipio, constituyendo prueba de la residencia en el Municipio y el domicilio habitual.

De ello se desprende que, el uso que la corporación haga de los datos contenidos en el padrón, incluidas las autorizaciones para poder acceder a su consulta, deberá circunscribirse a las funciones relacionadas estrictamente con las indicadas por la Ley. Cualquier otra utilización de los datos para un fin distinto supondrá una cesión o comunicación de los mismos que, tras lo establecido en la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, deberá contar con el consentimiento del afectado o encontrar cobertura en alguna de las excepciones contenidas en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, entre las que debe reseñarse, a los efectos del presente informe, la posibilidad de que exista una norma con rango de Ley habilitadora de la cesión.

Por tanto, el uso legítimo de los datos del Padrón municipal por las Administraciones públicas (incluidas las Entidades Locales) vendrá determinado en cada caso por el cumplimiento de ambas premisas, siendo por ello determinante la consideración del desarrollo de competencias efectivamente atribuidas a cada una de ellas, de acuerdo con el principio administrativo de competencia establecido en el artículo 12 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que debe analizarse cada uno de los supuestos concretos planteados.

II

Considerando ya el supuesto de cesión objeto de la presente consulta, donde la comunicación de los datos del Padrón se realizaría a una representación diplomática de España en el extranjero, la *cesión de los datos* del Padrón deberá fundarse en la necesidad por la Administración cesionaria, en el ejercicio de sus competencias, *de conocer* el dato del domicilio de la

persona afectada, dado que del artículo 4.2 de la LOPD se deriva la imposibilidad del tratamiento de los datos para fines diferentes de los que motivaron su recogida, salvo que así lo consienta el afectado o la Ley lo prescriba, (artículo 11.2 a) de la LOPD).

Al respecto el Convenio de Viena sobre las relaciones consulares, de 24 de abril de 1963, incorporado al sistema normativo español desde el 6 de marzo de 1970, fecha en la que se publicó el instrumento de ratificación con carácter definitivo oficialmente en España, determina en el artículo 5 las funciones consulares señalando que consistirán en:

“a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean persona, naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional;

e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas;

g) velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan en el territorio del Estado receptor;

El ejercicio de las competencias señaladas en los apartados anteriores comporta la posibilidad de realizar comunicaciones administrativas que interesen a los residentes nacionales, para lo cual será necesario localizar y conocer el domicilio de los hijos como posibles sucesores de la causante fallecida en el país extranjero, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJ-PAC que establece que “Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que

afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente.”

Por consiguiente, para proteger y velar por los intereses de los hijos de la fallecida en el país extranjero, el Consulado necesitará conocer el domicilio o residencia de éstos. Por ello, el dato de residencia solicitado al Ayuntamiento es un dato de carácter personal de relevancia para que el Consulado pueda desempeñar las funciones que le competen, y, por tanto, se cumplen las dos premisas del artículo 16.3 de la LBRL para que se puedan comunicar los datos del Padrón a otra Administración Pública sin consentimiento de los afectados.

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.